

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISION LABORAL

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	Pablo Emilio Sánchez Balzan
DEMANDADOS	Universidad de Antioquia
PROCEDENCIA	Juzgado 008 Laboral del Circuito de Medellín
RADICADO	05001 3105 008 2013 00478 01
INSTANCIA	Segunda
PROVIDENCIA	Sentencia Nro. 143 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Beneficios convencionales al pretender ser trabajador oficial – vigilante está catalogado como empleado público
DECISIÓN	Confirma

En la fecha, **cuatro (04) de agosto de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Claudia Angélica Martínez Castillo y como ponente Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento frente al grado jurisdiccional de consulta en favor del señor **Pablo Emilio Sánchez Balzan**, ordenado en sentencia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito dentro del proceso que promoviera en contra de la **Universidad de Antioquia**. Radicado único nacional 05001 3105 **008 2013 00478** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración el proyecto, estudiado, discutido y aprobado mediante acta **Nº 019**, que se plasma a continuación:

Antecedentes

El demandante convocó a juicio a la Universidad de Antioquia buscando que se declare que ostentaba la calidad de trabajador oficial de dicha entidad, desde el 21 de agosto de 1984, y con ello, obtener los beneficios establecidos en la convención colectiva. En consecuencia, ruega la reliquidación retroactiva de todos los conceptos salariales y prestacionales, lo cual incluye una remuneración superior con el correspondiente impacto en las cesantías, primas de vacaciones, extralegal de junio, de vida cara, de navidad, de antigüedad, aumento en el subsidio de transporte y en el familiar. Además, pide la indexación y el pago de las costas.

Para respaldar sus peticiones, en síntesis, sostiene que es empleado de la Universidad de Antioquia desde el 21 de agosto de 1984, ocupando para a fecha de presentación de la demanda el cargo de Vigilante a tiempo completo en el "Departamento de Vigilancia de la Vicerrectoría Administrativa", con un salario de \$1.118.700 para el año 2012. Que el Consejo Superior Universitario emitió el Acuerdo 07 el 27 de agosto de 1980, basado en los artículos 59 y 79 del Decreto 080 de 1980, el cual estableció la clasificación de los cargos como trabajadores oficiales o empleados públicos, derogando disposiciones anteriores. Según este acuerdo, el cargo de celador, que antes era considerado como trabajador oficial, fue reclasificado como empleado público, siendo nombrado con base en dicha norma y teniendo tal calidad en Resolución 498 del 9 de agosto de 1984. Menciona que el Acuerdo 07 de 1980 contradice lo establecido en la Ley 80 del mismo año, ya que reclasificó a muchos trabajadores oficiales como empleados públicos, violando la norma y las competencias del ente. Argumenta que, al igual que los celadores contratados antes del Acuerdo 07 de 1980, quienes fueron incorporados posteriormente también deberían considerarse como personal oficial, ya que la nulidad del mencionado Acuerdo hace efectivo lo establecido en el 07 de 1974, donde la función de

"celador" se clasificaba como trabajador oficial. Señala que en el Acuerdo 67 de 1987 se eliminó el oficio de celador y portero, creándose el de vigilante - manteniéndose en la misma categoría-, no obstante, realiza funciones propias de un trabajador oficial, como el mantenimiento de instalaciones y equipos. Menciona que, aunque el claustro tenía una convención colectiva de trabajo, esta no incluía la situación de los empleados públicos, lo que resultó en que no pudiera acceder a un salario más alto y afectara sus demás derechos. Por lo tanto, presentó reclamación a la entidad para que se reconociera su condición de trabajador oficial.

En auto del **06 de mayo de 2013**, se admitió y ordenó dar curso a la acción. Después de recibir la notificación, la Universidad de Antioquia, presentó respuesta oponiéndose a las pretensiones, argumentando para ello que el actor no tiene la calidad solicitada, ya que fue contratado como empleado público, debido a las funciones asignadas en los cargos que ocupó. Frente a los hechos acepta lo relacionados con la Resolución 498 de 1984, en la cual se nombró al demandante como celador, basándose en lo establecido en el Acuerdo 07 de 1980. También reconoce el salario devengado y el contenido de los Acuerdos 07 de 1974 y 07 de 1980, indicando que como empleado público, el señor Pablo no puede beneficiarse de la convención colectiva. Los restantes supuestos no son ciertos tal y como están narrados, aclarando que la entrada en vigencia del Acuerdo 07 de 1980 derogó la clasificación realizada en el Acuerdo 07 de 1974, mediante el cual los celadores (posteriormente Vigilantes) eran considerados trabajadores oficiales, pasado a ser empleados públicos. Señala que el Consejo Superior de la entidad tiene competencia para regular lo relacionado con la planta de cargos desde antes del Decreto 80 de 1980, en virtud de las facultades otorgadas por la Asamblea Departamental de Antioquia. Por último, propuso las excepciones de mérito de falta de causa para pedir y prescripción.

La primera instancia concluyó con **sentencia** proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito, el 02 de mayo del año en curso, declarando probada la excepción de falta de causa para pedir, en consecuencia, absolvió a la Universidad de Antioquia de las pretensiones incoadas en su contra, imponiendo costas a cargo del actor.

Adujo la juzgadora que los órganos de dirección de las instituciones educativas tienen la facultad de variar el estatus jurídico de sus empleados en virtud de la autonomía universitaria, por tal, dado que el actor comenzó a trabajar como celador en 1984, cuando ya estaban vigentes el artículo 122 del Decreto 80 de 1980 y el Acuerdo 07 del mismo, el cual derogó disposiciones anteriores sobre la materia de clasificación de los servidores y estableció que dicho cargo tendría la calidad de empleado público, no resultaba procedente cambiarla a trabajador oficial. Mencionó que aunque con el Acuerdo 067 de 1987 se suprimió el cargo de celador y portero, y se creó el de vigilante, esto no alteró la condición que traía el demandante.

Finalmente, indica que las funciones asignadas al cargo de vigilante no están directamente relacionadas con la construcción y el sostenimiento de obras públicas.

Al ser adversa la decisión a los intereses del actor y no haberse interpuesto recurso de apelación, se conoce de la misma en el grado jurisdiccional de consulta.

De la oportunidad para presentar **alegaciones** hizo uso la **Universidad de Antioquia**, mencionando que el cargo de celador fue clasificado como empleado público según el Acuerdo No 7 de 1980, que regula la Planta del Personal Administrativo de la institución. Destaca que el Acuerdo 7 de 1980 tiene bases legales sólidas y no ha sido objeto de ilegalidad o anulación. Por lo tanto, el empleo del demandante como vigilante debe ser

considerado como de empleado público, no de trabajador oficial, ya que sus funciones no se corresponden con las tareas específicas de estos últimos, como construcción, preparación de alimentos, actividades agropecuarias, jardinería, aseo y mantenimiento de edificaciones o equipos.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones:

Los hechos debidamente comprobados en relación al señor Pablo Emilio Sánchez Balzan son los siguientes: nació el 05 de abril de 1958. Fue nombrado en la Universidad de Antioquia a través de Resolución y tomó posesión del cargo de "celador" a tiempo completo, adscrito al Departamento de Coordinación de Haciendas de las Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Esto ocurrió mediante el acta 7511 del 17 de agosto de 1984, y comenzó a ejecutar labores a partir del 21 de agosto del mismo año.

Teniendo en cuenta el recuento realizado y el grado jurisdiccional de consulta, **el problema jurídico** en esta instancia se circunscribe a establecer, si el actor ostenta la calidad de trabajador oficial y con ello es procedente aplicarle los beneficios consagrados en la convención colectiva de trabajo vigente en la entidad accionada.

Pues bien, para dilucidar la naturaleza jurídica de la vinculación laboral del actor con la demandada, la que se dio en 1984, es necesario tener en cuenta que el artículo 122 del Decreto 80 de 1980, establece el sistema de educación post-secundaria. Según este precepto, el personal administrativo de las instituciones oficiales de educación superior se divide en empleados públicos y trabajadores oficiales. **La calidad de trabajador oficial se aplica a aquellos que desempeñan funciones específicas relacionadas con**

construcción, preparación de alimentos, actividades agropecuarias, jardinería, aseo y mantenimiento de edificaciones o equipos. El restante personal administrativo se considera empleados públicos.

El inciso 2º de dicho canon prevé que los empleados oficiales que, en el momento de la expedición del Decreto, tuvieran la condición de trabajadores oficiales, conservarán la misma mientras el respectivo Consejo Superior expida la planta de personal contemplada en el artículo 59 del de tal estatuto que en su literal f), autoriza: *"Expedir, con arreglo al presupuesto y a las normas legales y reglamentarias, a propuesta del rector, la planta de personal de la institución, con señalamiento de los cargos que serán desempeñados por docentes y por empleados y trabajadores oficiales del orden administrativo"*.

Así las cosas, mediante Acuerdo No. 7 del 27 de agosto de 1980, el Consejo Superior de la demandada adoptó la planta del personal administrativo y clasificó los cargos que debían ser desempeñados por empleados públicos y trabajadores oficiales, indicando que estos últimos corresponden a los *"obreros que desempeñen funciones de construcción, preparación de alimentos, actividades agropecuarias, jardinería, aseo y mantenimiento de edificaciones o equipos"*. **En dicho acto se especificó que el Departamento de Coordinación de Haciendas tendría un cargo de "celador" el cual estaba clasificado como empleado público.**

Como quiera que la vinculación del señor Pablo, se dio a partir del 21 de agosto de 1984, como "celador", se tiene que en ningún momento tuvo la calidad de trabajador oficial, que se encontraba regulada en el Acuerdo 07 del 28 de noviembre de 1974 del Consejo Directivo de la Universidad de Antioquia, el cual disponía: *"son trabajadores oficiales ligados a la Universidad por una relación de trabajo, los que desempeñen los siguientes oficios previstos en el Acuerdo No. 3 de julio 2 de 1.974, emanado del Consejo Directivo: Aseador, carpintero, **celador**, conductor I, conductor II, encargada de oficios domésticos, encargado de guardarropa, jardinero, mensajero, obrero, oficial de albañilería, portero, armador, auxiliar de anfiteatro I, auxiliar de anfiteatro II, auxiliar de fotografía, auxiliar de Higiene*

Oral, ayudante de electricidad, electricista, encuadernador o reparador de duplicador I, operador de duplicador II, operador de perforadora, verificadora, operador de prensa II, telefonista, auxiliar de encuadernación, auxiliar de laboratorio y plome.”, en tanto, a raíz del Acuerdo 7 del 27 de agosto de 1980, este cargo fue catalogado como **empleado público**, lo cual implicó que el hoy demandante no tuviera derechos adquiridos como trabajador oficial y en consecuencia, no es posible aplicarle las normas convencionales que benefician únicamente a este grupo de colaboradores.

Es importante señalar que incluso si se hubiese incorporado antes del Acuerdo No. 7 de 1980, tampoco conservaría tal prerrogativa al haber mutado su calidad, tal y como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación. Entre otras, en sentencia SL16326-2014, donde cita la SL, 24 abr. 2013, rad. 49789, indicó:

*... es suficiente recordar que la Corte, en casos similares al presente, en los cuales se plantea idéntica controversia a la aquí propuesta entre la **UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA** y sus servidores como trabajadores oficiales pero en virtud de la vigencia del Decreto 80 de 1980 mutaron su condición a empleados públicos, ha sentado que, como en este caso, no existiendo discusión en el proceso que a partir del 27 de agosto de 1980, cuando entró en vigencia el Acuerdo 7 del Consejo Superior Universitario de la dicha Universidad, en desarrollo de lo prescrito en el artículo 122 del Decreto 80 de 1980 – 27 de agosto de 1980 cuando se aprobó la planta de personal mediante Acuerdo 7 del Consejo Superior Universitario --, el demandado pasó de la calidad de trabajador oficial a la de empleado público, calidad que mantuvo hasta cuando dejó de laborar para la demandante, el 24 de septiembre de 1995*

Y en la SL3275-2022, al analizar un caso con tintes similares al aquí debatido, puntualizó:

En los folios 29 a 57 y 122 a 150 del primer cuaderno, aparece el Acuerdo No. 7 del 27 de agosto de 1980, por medio del cual el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, adoptó la planta del personal administrativo y clasificó los cargos que debían ser desempeñados por empleados públicos y trabajadores oficiales (...) Así el Acuerdo determinó que los cargos de aseo, jardinero, peón, encargado de oficios domésticos, se desempeñarían por trabajadores oficiales, y los demás como empleados públicos. (Subraya la Sala)

Dice el recurrente que el Decreto 80 de 1980, fue declarado inexecutable por la Sala

Plena de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 16 de marzo de 1982, y por ende el Acuerdo 7 de 1980 emitido por la demandante, debe tenerse como inexistente. No obstante, lo cierto fue que la sentencia CSJ C1, 16 mar. 1982, expediente 881, sólo declaró la inexequibilidad de los artículos 51, 125, 126 y 133 del Decreto 80 de 1980, y se inhibió de pronunciarse acerca de los artículos 56 y 124 del mismo Decreto, normas estas que no tiene relación con la clasificación de los empleados de las instituciones oficiales de Educación Superior.

De lo copiado se resalta que, **de acuerdo con el precedente, como lo analizó el Tribunal, esta Corporación halló legítima la clasificación de los servidores que efectuó la Universidad de Antioquia, mediante Acuerdo No. 7 del 27 de agosto de 1980, en el que las funciones de vigilancia, no quedaron comprendidas dentro de aquellas desplegadas por un trabajador oficial.** La aludida cita jurisprudencial, también es útil para descartar el «decaimiento» que refiere el atacante del mencionado Acuerdo 7 de 1980, además que no detalla los motivos por los que considera que se pudo configurar un decaimiento del mismo.

La providencia atrás duplicada, guarda armonía con lo decidido por esta Corporación, en fallos CSJ SL 3 may. 2011, Rad. 38212 y CSJ SL18 jun. 2010, Rad. 40794, toda vez, que en estos pronunciamientos, al analizar temas pensionales, esta **Sala dejó claro que a partir del Decreto 80 de 1980 y el Acuerdo 7 del 27 de agosto del mismo año, el vínculo de las personas que fungieron como vigilantes, era en calidad de empleados públicos.** En armonía con lo analizado, la disertación y conclusión jurídica del juez de segundo nivel, es adecuada y no se aprecia una hermenéutica equivocada.” Resaltos fuera del texto e intencionales de la Sala. Sobre el particular también puede verse la sentencia SL16326 de 2014.

De lo expuesto se concluye que a partir del 27 de agosto de 1980 (cuando entró en vigencia el Acuerdo 7 del Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia, en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 122 del Decreto 80 de 1980), las personas que venían desempeñando el cargo de celadores pasaron de tener la calidad jurídica de trabajador oficial a la de empleado público, por tal, al haber prestado los servicios el actor a partir del 21 de agosto de 1984, esto es, con posterioridad a la expedición de dicha normativa, siempre estuvo clasificado en esta última categoría, manteniéndose la misma, incluso después de la supresión del cargo de celador y la creación del oficio de vigilante mediante el Acuerdo 67 de 1987.

Finalmente, es de indicar que al actor le correspondía demostrar que sus labores se enmarcaban en las de “*construcción, preparación de alimentos, actividades agropecuarias, jardinería, aseo y mantenimiento de edificaciones o equipos*”, para así poderse clasificar como trabajar oficial, exigencia que no satisfizo pues, por el contrario, según el documento por el mismo adosado, entre las ocupaciones de un vigilante, se hallan las de:

"1. Recibir el puesto asignado y con él el inventario de los elementos requeridos para el desempeño de su oficio. 2. Solicitar identificación a las personas. Efectuar rondas y hacer control de acuerdo con normas y programas establecidos. 3. Revisar paquetes, maletines y/o artículos que portan las personas al salir o entrar identificando aquellos equipos o elementos que requieren de orden escrita para ser ingresados o evacuados. 4. Inspeccionar vehículos a la entrada y salida. 5. Informar novedades al término de la jornada o en el transcurso de la misma, si se considera necesario. 6. Contestar al teléfono para interconectarlo con otras dependencias o para dar información, ésta si está plenamente autorizado. 7. Cumplir y hacer cumplir las normas sobre seguridad y entrada y salida de personas. 8. Dar información a autoridades competentes en caso de presentarse novedades en contra de la integridad física de personas e instalaciones bajo su cuidado. 9. Dar orientación a las personas que lo soliciten, en cuanto ubicación de personas e instalaciones. 10 Hacer entrega del puesto asignado y con él el inventario de los elementos propios para el desempeño de su oficio. 11. Dar mantenimiento y hacer buen uso de las armas de dotación. 12 Cumplir con las demás funciones inherentes a su oficio y que le sean asignadas por autoridad competente."

Colofón, al no ser tener el señor Pablo la condición invocada, no es beneficiario de la convención colectiva, por aplicarse los beneficios de este instrumento únicamente a los trabajadores oficiales. En consecuencia, se confirma la sentencia revisada.


Sin costas al analizarse la decisión en el grado jurisdiccional de consulta.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **confirma** la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Pablo Emilio Sánchez Balzan** en contra de la **Universidad de Antioquia**.

Sin costas al analizarse la decisión en el grado jurisdiccional de consulta.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO, que se fijará por secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en Auto AL2550-2021.

Los magistrados (firmas escaneadas)



LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL



MARÍA-EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO